**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D.C. veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Referencia 11001 40 03 057 2021 00448 00 Acción de Tutela

Resuelve el Despacho en primera instancia la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política de Colombia, en concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el inciso 1, artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017, este Despacho Judicial es competente para tramitar la acción de tutela presentada por la señora NINI JOHANA TAMAYO SILVA a través de apoderada judicial, contra la ADMINISTRACIÓN y el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 2, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición e información.

2. La situación fáctica planteada por el actor, se resumen de la siguiente manera:

2.1. Desde el mes de noviembre de 2013, la señora Nini Johana Tamayo Silva es propietaria del apartamento 403, interior 6 del Conjunto Residencial Parque Central de Occidente 2, ubicado en la Calle 77 B No. 129 – 11 de la ciudad de Bogotá.

2.2. La accionante y su esposo son profesionales de la salud, y debido a sus actividades y compromisos laborales no permanecen en el inmueble de su propiedad, al igual que sus menores hijos, quienes han sido cuidados desde su nacimiento por la abuela materna.

2.3. El señor Jairo Alonso Reyes García, propietario del apartamento inferior, desde el año 2018 ha ejercido actos de perturbación a la posesión, y sana convivencia, pues a altas horas de la noche y la madrugada a generado ruidos en el techo, y la puerta del predio aduciendo escuchar ruidos. También a ejercidos actos de acoso mediante mensaje de whatsapp y mensajes dejados por debajo de la puerta.

2.4. Debido a ello, la accionante y su grupo familiar decisión mudarse y arrendar el inmueble a una pareja joven con un menor de seis meses, quienes igualmente se han visto afectados por el comportamiento del señor Reyes García.

2.5. EL 17 de diciembre de 2020, sostuvieron una reunión con la administración, y el señor Reyes García, comprometiéndose a cesar dicho comportamiento, y en caso de no lograrse se impondría una multa. Lo cual fue infructuosos pues desde ese mismo día continuo con los actos de perturbación, y la administración no impuso ninguna sanción.

2.6. La señora Nini Johana Tamayo Silva envió mails los días 22 de enero, 02 de febrero, 09 de febrero, 16 de febrero del 2021 a la administración de la copropiedad, solicitando que se tomaran medidas frente al comportamiento del señor Reyes García.

2.7. El 19 y 24 de febrero de 2021 elevó derecho de petición ante la copropiedad cuestionada para que se sirviera imponer multa al señor Jairo

Alonso Reyes García, la cual no ha sido contestado de fondo a la fecha de interposición del libelo.

2.8. El 19 de febrero de 2021, se le invio un correo electrónico donde se le comunicaba que se tomarían los correctivos necesarios.

2.9. Debido a los problemas causados por el propietario del apartamento 303 interior 6 del conjunto parque central de occidente 2, y la omisión de la administración, los arrendatarios le entregaron el inmueble, lo cual se ha causado un perjuicio económico, pues no cuenta con suficientes recursos para poder sufragar el costo del crédito hipotecario, el canon de su nuevo domicilio, y los gastos de su núcleo familiar. Adicionalmente los constantes actos de perturbación le han afectado su tranquilidad y sosiego.

3. Pretende a través de esta queja el amparo de los derechos fundamentales de petición e información, ordenándose a la ADMINISTRACIÓN Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 2 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, que respondan la solicitud incoada el 4 de junio de 2020, *“...demostrándole que si se sancionó al propietario del apartamento 303 del interior 6 del Conjunto Parque Central de Occidente 2, imponiéndole una multa, por los hechos reiterados de su arrendatario que afectan la tranquilidad y convivencia en propiedad horizontal desde el año 2018 a la fecha...”*

TRAMITE PROCESAL

2.1. Este Despacho Judicial avocó conocimiento de la acción constitucional mediante proveído de 11 de mayo del año que avanza ordenándose la notificación de la Administración y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial del Parque Central de Occidente 2.

2.2. Surtida en debida forma la notificación de la Administración y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial del Parque Central de Occidente 2., procedió a dar contestación a la queja constitucional. En síntesis manifestó, que en atención a las reclamaciones incoadas, se procedió a dar respuesta al derecho de petición presentado por la actora, en donde se le enfatizo que esa entidad no tiene la facultad legal para imponer sanciones a propietarios, y residentes de la copropiedad por asuntos generados por acoso o alguna perturbación a la posesión, iterando que ese punto debe ser resultado por al Juez Civil Municipal o el Inspector de Policía, máxime cuando en el año 2020 se radico varias quejas por ruidos provenientes de reuniones realizadas en el apartamento de propiedad de la actora. Poniendo en conocimiento del comité de convivencia la situación expuesta con ánimo de llegar a un acuerdo entre las partes.

2.3. Mediante correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2021, la parte actora manifestó que no está de acuerdo con la respuesta brindada por la copropiedad, puesto que si se encuentra en sus funciones emitir una solución definitiva a la situación que dio origen a las peticiones elevadas y que se han presentado por cuatro años consecutivos, por ende, no puede excusarse en que dicho conflicto debe ser solucionado por una autoridad Policiva, ya que los hechos están ocurriendo dentro de la propiedad horizontal; luego la actora y su núcleo familiar, al ser residentes y propietarios, quienes pagan sin demora las expensas de administración, tiene derecho a que se le atiendan sus pedimentos de forma efectiva.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela consagrada en la Constitución Política de 1991, se creó como una vía sumaria, preferente, y perentoria para proteger los derechos fundamentales, que hayan sido amenazados o violentados por las autoridades o los particulares. En dicho evento, cualquier sujeto que se encuentre en estado de indefensión y al que se pueda causar un perjuicio irremediable, podrá acudir al juez constitucional en defensa de las prerrogativas conculcadas como mecanismo transitorio, siempre y cuando no disponga de otro medio de defensa judicial. La vía constitucional no sustituye los mecanismos ordinarios principales, ni modifica las reglas de la competencia de los jueces, ni crea instancias adicionales a las existentes.

2. El problema jurídico a dilucidar, se circunscribe a verificar si la Administración y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial del Parque Central de Occidente 2, ha vulnerado los derechos fundamentales de petición e información del señor Luis Eduardo Ramírez Cortes.

3. El derecho de petición, como una prerrogativa fundamental expresamente consagrada en el artículo 23 de la Carta Política de Colombia, surge como un mecanismo para obtener una respuesta por parte de una autoridad pública o privada, cuya decisión debe ser de fondo, clara y precisa. Los pronunciamientos tardíos y ambiguos no constituyen una contestación efectiva, ya que lesionan el núcleo esencial de dicho derecho, puesto que no se obtiene una solución a lo peticionado.¹

La Jurisprudencia Constitucional ha identificado, que el núcleo esencial del derecho de petición incluye: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos solicitudes ante las autoridades públicas y los particulares; b) el destinatario tiene la obligación de tramitar y resolver las peticiones incoadas dentro de los términos señalados por la Ley; c) la resolución debe ser clara, precisa y consecuente con las peticiones elevadas, no es admisible las respuestas evasivas; d) el contenido de la respuesta puede ser favorable o desfavorable a lo pedido; y e) se debe notificar la contestación dada, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso.²

Frente a los términos para resolver los derechos de petición, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 prevé que las peticiones de orden general deberán resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Exceptuando las peticiones de documentos y de información que deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Términos que fueron modificados dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica desatada por la pandemia del coronavirus del Covid – 19. El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, señala que todas las peticiones que se presente durante tiempo que dure la emergencia deberán resolverse dentro de los (30) días siguientes a su recepción. Las que sólo se traten de peticiones de documentos y de información se resolverán dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

De igual forma, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha precisado que los elementos estructurales del derecho de petición, se limitan a establecer que: (i) toda persona natural y/o jurídica podrá presentar peticiones respetuosas de interés general o particular, (ii) la solicitud podrá realizarse de forma verbal o escrita, y (iii) no se requiere invocar una técnica específica para incoarlo.³

---

¹ Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas

³ "...Elementos que conforman el derecho fundamental de petición (...) Esta Corporación se ha pronunciado sobre los elementos estructurales que componen el derecho de petición. Particularmente, en la sentencia C-818 de 2011, reiterada por la C-951 de 2014, se refirió a los siguientes elementos: (...) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general (...) Tanto las personas

4. La Corte Constitucional en torno a la protección de este derecho ha decantado la materia señalando los derroteros que permiten su viabilidad puntualizando:

“... (i) se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante para la efectividad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;

(ii) este derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas y a los particulares;

(iii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión planteada por el peticionario;

(iv) la respuesta debe cumplir con estos requisitos: a) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa, oportuna y acorde con lo solicitado; y b) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

(v) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

(vi) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita;

(vii) por regla general están vinculadas por este derecho las entidades estatales, y en algunos casos a los particulares;

(viii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;

(ix) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

(x) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;

---

naturales como las jurídicas son titulares del derecho fundamental de petición (...) La petición puede ser verbal o escrita (...) La Corte ha señalado que el artículo 23 de la Norma Superior no hace ninguna diferenciación entre las peticiones presentadas de forma verbal y las escritas, en esa medida los dos tipos de solicitudes se encuentran amparadas por el derecho fundamental de petición (...) Las peticiones deben ser formuladas de manera respetuosa (...) Este Tribunal ha establecido que las solicitudes solo tienen el amparo constitucional cuando son presentadas en términos respetuosos. Particularmente la sentencia T-353 de 2000, resaltó el deber de respeto a la autoridad ante la cual se presenta la petición, pues de lo contrario la obligación de responder no nace a la vida jurídica. En este sentido, de forma excepcional es posible rechazar una solicitud que se considere irrespetuosa, sin embargo, esta interpretación es restrictiva, en consideración a que no toda petición puede tacharse de esa manera para sustraerse de la obligación de dar una respuesta de fondo (...) La informalidad de la petición (...) La Corte ha insistido en diferentes oportunidades que el derecho de petición se ejerce a pesar de que las personas no lo digan de forma expresa. En este sentido, si una autoridad exige que se diga específicamente que se presenta una solicitud de petición en ejercicio de este derecho, impone al ciudadano una carga que no se encuentra prevista en la ley ni en la Constitución Política...”. Sentencia 238 de 2018.

(xi) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado...⁴

5. En el caso concreto, la accionante Nini Johana Tamayo Silva dijo, que el 19 y 24 de febrero de los corrientes, radicó ante la Administración y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial del Parque Central de Occidente 2 derecho de petición, consistente en que, *“...PRIMERO: que ustedes impongan de inmediato multa al propietario del apartamento 303 de la torre 6 por los actos relatados aquí de su arrendatario que vienen sucediendo desde el año 2018 a la fecha y los cuales cada vez son peor. Y que de la imposición de esa multa se me genere constancia a mi porque soy la directamente afectada por el actuar lesivo del arrendatario de ese apartamento (...) SEGUNDO: que si el comportamiento de ese arrendatario del apartamento 303 de la torre 6 se repite y él vuelve a golpear el techo con un palo, a golpear mi piso, a molestar a mis arrendatarios, mi familia o a mí, a ir a mi apartamento a decir que se está haciendo ruido, a escribir o llamar por WhatsApp, a dejar notas como lo ha hecho por debajo de la puerta de mi apartamento, etc., solicito que la administración vuelva a imponer multa o a sancionar con más severidad al propietario de ese apartamento e incluso le requiera que el dueño finalice el contrato de arrendamiento con ese señor, y si ello no se soluciona o no se lleva a cabo, entonces exija que la administración sea el ente que acuda a instancias legales según el código de policía buscando solución de fondo a ese problema, pero siempre con copia a mí (...) TERCERO: que acorde con las dos peticiones anteriores siendo estas resultas favorablemente para mí, en tal sentido la administración y/o el consejo de administración me conteste por escrito esta petición así como los correos electrónicos en los que he interpuesto quejas y los demás que siga elevando ante la misma situación, y se abstengan de guardar silencio o de contestar cualquier cosa por salir del paso sin que jamás se resuelva la situación de fondo, como lamentablemente siempre ha hecho la administración...”*

Al momento de contestarse la acción de tutela, la Administración y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial del Parque Central de Occidente 2 indicó que el pasado 13 de mayo de los corrientes dio respuesta al requerimiento de la accionante, allegando la remisión efectuada al correo electrónico indicado en el escrito introductor, donde se precisó que *“...realizada esta antesala solo a manera informativa sin que con ello desee justificarme, sino ponerla en el contexto de nuestra realidad, procedo a resolver de fondo su petición, en el entendido de que esta administración conoció los hechos puestos de presente por usted, así como consta que las anteriores administraciones también las conocieron y cada una de ellas, promovió acciones con el fin de mediar la problemática propuesta, máxime cuando las reclamaciones son recíprocas y por idénticos hechos, por lo que procedo a poner de presente a usted, que es el Comité de Convivencia de la copropiedad, quien se encuentra facultado por la Ley y el Reglamento de Propiedad Horizontal Vigente, para valorar las diferentes situaciones que se presentan con los residentes de la propiedad horizontal, teniendo la potestad de convocar a las partes o requerirlos para que se pronuncien de manera escrita o verbal, y de allí determinar si es viable intervenir como mediador en los hechos materia de controversia, con el fin de que a través de la amigable composición se superen los conflictos suscitados y se subsanen las afectaciones causadas de ser el caso, así como si hay lugar o no a la imposición de sanciones de tipo pecuniario a título de multas por faltas a la convivencia, sin embargo la copropiedad no contaba para el 01 de marzo de 2021 con la constitución de dicho órgano administrativo, ya que el comité electo en la asamblea de 2019 no se encontraba interesado en continuar con tal función ante la ausencia del*

---

⁴ Sentencia T-369/13

desarrollo de la asamblea ordinaria del año 2020 desde marzo del año anterior, sin embargo ante tal falencia, la copropiedad no se manifestó ajena o distante a tal situación, ya que conforme lo ha manifestado por usted en varios de sus escritos, el pasado 17 de diciembre de 2020, tuvo la posibilidad de una acercamiento con intermediación de la administración de ese momento, llegando a convenios con el presunto infractor, los cuales ahora se alega por usted que no se han cumplido, y debe destacarse, que no cuenta la copropiedad con facultad legal para exigir al residente del apartamento 303 torre 6 el cumplimiento de lo pactado, sin dejar de lado que desafortunadamente tampoco se cuenta con convenio escrito que así lo demuestre y permita la exigibilidad del pacto, por lo que este tema debe ser sometido a otro tipo de procedimientos legales, como se le recomendó, específicamente los previstos en la Ley 1801 de 2016, por lo que también se encuentra demostrado por usted que atendiendo las recomendaciones elevadas ante usted en varias comunicaciones por esta representación legal, acudió en su derecho ante la Inspección de Policía de Engativá, actuaciones que se adelantan dentro del radicado No. 20214210116832.

Actuación que confirma nuestra atención este año se dio ante las solicitudes presentadas de manera verbal y directa, siendo nuestra sugerencia atendida con la instauración de la querrela policiva, ante cuyo proceso si podrá realizarse un debido proceso más asertivo y eficiente, dado que la copropiedad y por ende esta administración carece de facultades para ingresar a los apartamentos o constatar varios de los argumentos o indicaciones expuestas por ambas partes, donde se denuncian mutuamente por perturbación a la tranquilidad dentro de sus apartamentos, sin que por áreas comunes o por otros apartamentos se haya evidenciado esto o corroborado denuncias por los otros apartamentos colindantes.

Ahora bien, como es del pleno interés de esta representación legal, que los órganos administrativos de la copropiedad, ejerzan sus funciones en los términos de la Ley y en pro del beneficio de la comunidad en general y, conforme al desarrollo de la Asamblea Ordinaria del presente año, la que tuvo lugar de manera virtual los días 27 y 30 marzo de 2021, ajustado a los términos de la Ley 675 de 2001 y el Decreto 176 de 2021, donde se puso de presente a los asambleístas la urgencia de contar con el Comité de Convivencia para atender varios temas graves que afectan la convivencia de la comunidad, por lo que los asambleístas aceptaron la postulación de tres (3) residentes para conformar el Comité de Convivencia, los cuales luego instrumentada el acta de la asamblea el pasado 27 de abril de 2021, se procede a solicitar que les promoviera inducción para el ejercicio de sus funciones, la cual tuvo lugar el pasado lunes 10 de mayo de 2021.

Por tanto, con el fin de atender su petición de manera plena, en el sentido de que solicita se imponga una multa a quien resulte demostrado que es el responsable de la afectación manifestada por usted o la convivencia como tal, ya que efectivamente podrían deprecar en una afectación del uso del bien privado suyo o de terceros, situación que desborda las facultades de la representación legal, puesto que su alcance de protección y cuidado se limita a las bienes comunes, así como ejecutar las multas más no imponerlas cuando surgen de obligaciones no pecuniarias, sin embargo, es claro que a través de los órganos administrativos de la copropiedad como lo es el Comité de Convivencia, es donde deberán desatarse estas controversias, sin dejar de lado el hecho de que el residente del inmueble 303 de la torre 6, de igual modo ha presentado quejas en contra suya y de los residentes de su inmueble, por lo que para esta representación legal no existe certeza del origen o causal del hecho reprochado, ni existe prueba que permita determinar la viabilidad de imponer una multa en contra de alguno de los propietarios o residentes de

alguno de los inmuebles involucrados en esta situación, por lo que se corre traslado al Comité de Convivencia para lo de su cargo....”.

Respuesta que fue remitida mediante correo electrónico de data 13 de mayo de 2021, la cual se comunicó con posterioridad al lapso de tiempo que tiene la encartada para dar contestación al petitorio, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1755 de 2015,⁵ y en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 dictado por el Gobierno Nacional dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica,⁶ aunado a la naturaleza el requerimiento, corresponde a los treinta (30) días siguientes a la recepción del competente, es decir, que al momento de la interposición de esta tutela, que fue el día 10 de mayo de 2021 (ver Acta Individual de Reparto), ya se había vencido el lapso para dar respuesta, el cual acaeció el 6 y 12 de abril de 2021.

No obstante a lo anterior, es menester precisar que el derecho de petición incoado por la señora Nini Johana Tamayo Silva no ha sido trasgredido por la encartada Administración y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial del Parque Central de Occidente 2, en la medida que este dio respuesta donde se le precisó a la accionante que en principio las diferencias, altercados y desacuerdos presentados con el residente del apartamento 303 del interior 6 de esa copropiedad, deben ser expuestos directamente por las partes en contienda a través de un proceso policivo, tal y como se le ha sugerido repetidamente a los involucrados, lo que dio lugar al proceso contravencional cursado ante la Inspección de Policía de Engativá. De igual forma se señaló que no se va imponer la sanción peticionada, ya que esa copropiedad no tiene facultad para emitir acciones correctivas por los hechos aducidos en la demanda, máxime cuando en repetidas ocasiones también se ha instaurado otras quejas por ruidos provenientes del predio de propiedad de la actora, luego la administración no tiene claridad acerca de quien realmente están perturbando la sana convivencia entre copropietarios, y tampoco obra prueba de que la Administración impondría alguna sanción, como lo relata la quejosa. Empero a ello, se puso en conocimiento del Comité de Convivencia para que este pueda mediar el conflicto surgido y proponer fórmulas de arreglo, pero en ningún caso emitió una sanción.

En punto, es menester precisar que la respuesta a un derecho de petición se estima efectiva y suficiente cuando aquella soluciona de forma material el caso que se plantea, con independencia a que sea negativa o positivamente, y congruente cuando exista coherencia entre lo peticionado y lo resuelto. De tal manera que la solución a lo requerido debe versar sobre la pregunta en concreto y no sobre otro tema. El pronunciamiento del receptor debe ser claro y preciso, donde se destaque los aciertos o desaciertos de lo peticionado. Finalmente debe ser comunicado a la dirección electrónica o física señalada en la petición, a efecto de que el destinatario pueda conocer el pronunciamiento del receptor.⁷ Presupuestos que se configuran en el caso de marras, pues en efecto la propiedad horizontal encartada procedió a dar respuesta a las peticiones elevadas por la demandante en debida forma, lo que impide enviciar su transgresión.

6. Finalmente cabe señalar que resulta improcedente vincular a la causa la Inspección de Policía de Engativá y al propietario del inmueble del apartamento 303 de la torre 6, tal y como lo menciona la accionada Administración y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial del

⁵ “...Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción...”

⁶ Estado de Emergencia prorrogado hasta el día 31 de mayo de 2021, de acuerdo a la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159366>

⁷ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas

Parque Central de Occidente 2, pues se itera que el derecho aquí invocado es de petición, y la pretensión principal es que se resuelva de forma positiva la petición incoada por la señora Nini Johana Tamayo Silva el 19 y 24 de febrero de 2021. Luego se evidencia, que los lineamientos que deben debatirse son los que atañen a la legitimación por activa y pasiva para dar respuesta a los pedimentos de la quejosa, sobre la pronta resolución al destinatario, y el sentido de la decisión de forma congruente, clara y precisa, cuya decisión negativa o positiva dependerá de las circunstancias de cada caso. Por tanto, no se requiere de convocar a dichos sujetos, pues el punto central de la petición no es el debido proceso, defensa y contradicción en las actuaciones que se han generado en el trámite administrativo Policivo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por la señora NINI JOHANA TAMAYO SILVA por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a quienes fueron vinculados a la presente acción por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR en su oportunidad las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en el evento que no fuere impugnado.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**7796bf011af0fc9a6f416b1a95fb7926d0e4123616054a27586b930eed884c1
d**

Documento generado en 24/05/2021 01:57:46 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**